

La impunidad del crimen político en El Salvador

A PROPOSITO DEL ASESINATO DE SEIS LIDERES DEL FDR

El Salvador ha sufrido, en los últimos tiempos, una de las experiencias más tristes de su historia: el crimen político.

Por causas que habría que analizar más a fondo, los grupos y sectores fanatizados han hecho suyos los métodos de la eliminación física del adversario en un intento de aplastar las ideas y borrar de golpe la voz y la actividad que se considera negativa para la causa o interés que se defiende.

La adopción de tales prácticas violentas e irracionales han tratado de explicarse de mil maneras: unos, en razón de mantener sus privilegios económicos y bajo el discurso ideológico de proteger la democracia y la propiedad privada en contra de los contestatarios, subversivos o comunistas; otros, bajo el argumento de que no siendo posible el cambio revolucionario dentro de los marcos y límites trazados por el sistema, el uso de las armas se justifica para generar un nuevo poder, favorable a los dominados. En síntesis: unos para conservar un tipo de dominación y otros para derribar y construir las bases de un nuevo poder y una nueva sociedad.

El hecho, reiteramos, debe examinarse a la luz de la racionalidad. No siempre el empleo de las armas legitima el poder establecido. Las más de las veces el abuso de la fuerza bruta, del fusil y los balazos, trae la muerte de lo que se pretende defender. La arbitrariedad y la absolutización del esquema político excluyente, conduce al callejón de las confrontaciones peligrosas. Los pelotones policíacos, las torturas y los asesinatos cometidos por la gendarmería de Luis XVI contribuyeron a crear el clima propicio de la revolución francesa. Igual cosa sucedió con las fuerzas militares zaristas de Nicolás II que bajo el terror engañoso pretendieron contro-

lar la insatisfacción de las masas, bajo métodos tales como el arresto y secuestro de los opositores, la tortura, el asesinato y la contención social, la censura de prensa, la ilegalización de los sindicatos y el control de las entidades políticas, la muerte planificada de los líderes políticos adversos, todo en una espiral de violencia que llevó al desastre en muy poco tiempo, a la inmovible estructura del Zar de todas las Rusias.

Guardando las distancias, en la época moderna y contemporánea, los gobiernos más duros e inflexibles son los que más han ayudado al triunfo de las revoluciones y al levantamiento de los pueblos. Ahí están los casos de Juan Vicente Gómez, Porfirio Díaz, Marcos Pérez Jiménez, Fulgencio Batista y Anastasio Somoza, para citar de paso a los últimos y más destacados gobernantes de la fauna política latinoamericana. No es cierto, advertimos, que el orden policíaco o castrense sirva de sustentación o soporte al orden social. En tanto el primero es auxiliar para mantener unos márgenes de convivencia aceptable, el segundo configura el marco global de los valores fundamentales en que se desarrolla la vida de las diferentes clases, sectores, estratos de la sociedad. Cuando el orden policíaco o militar sobrepasa los límites del orden general de valores pactado por el todo social, entonces sobreviene la insurrección, la revolución. Eso tan elemental hay que repetirlo en nuestro país, para concluir que parte de la violencia que vive la nación es producto de un enfoque errado de seguridad nacional, de "orden y paz" que pretende imponerse por la fuerza, con garrote, cárcel, destierro y muerte, con el agravante de la impunidad y la corrupción de quienes gobier-

nan en la cúpula del poder del Estado. Con la complicidad cuando no con el planeamiento y ejecución articulada con órganos políticos que, con la visión simple y torpe de "controlar" la subversión por estos mecanismos, fomentan aún más subversión y le dan sentido ético e histórico al levantamiento de las masas.

Estas consideraciones vienen al caso, al recordar el asesinato de algunas personalidades en la vida política de 1980 y 1981. Podríamos situarnos también en 1979 o en otros años, más la cantidad de crímenes políticos es mayor en los dos antes mencionados. Se trata de una escalada de violencia sin precedentes. Más de 35 mil muertos por motivos políticos es un hecho que debe ponernos a pensar, a reflexionar, a situar los acontecimientos en un contexto general de confrontación entre grupos antagónicos que parecieran haber olvidado que no siempre "el poder nace del fusil". Un poder sin razón, al margen de la justicia, al margen de la dignidad humana, al margen del respeto a la vida de los ciudadanos, es un poder espúreo, insano, bárbaro y criminal.

La muerte planificada y premeditada de Monseñor Oscar Romero hizo exclamar a Monseñor Eamon Casey: "El asesinato de este Pastor indica que algo maligno, oscuro y podrido hay en las raíces de la sociedad salvadoreña". Y tiene razón. Cuando se mata a un hombre al servicio de la palabra de Dios, de la Iglesia, como fue el caso del desaparecido Arzobispo de San Salvador, todo tiene que revisarse. El mal poder, esté donde esté, tiene que ser combatido, desterrado, extirpado como cáncer social, a riesgo de invadir y matar lentamente el cuerpo social y los valores que lo sustentan.

Igual puede decirse respecto al acto político-militar de asesinar a seis personas desarmadas, dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), quienes discutían el 27 de noviembre de 1980 la forma de contribuir a la solución de los problemas que vive la nación salvadoreña. Trataban, como ciudadanos, de aportar ideas y voluntades para sacar al país del estancamiento. El grupo opositor tenía, en consecuencia, derecho a disentir de los gobernantes y de oponerse a los esquemas de dominación.

El FDR como instancia unitaria de or-

ganizaciones políticas sin armas, y por lo tanto con licitud de reunirse y expresar sus puntos de vista sobre la realidad, lejos de tomarse como "subversiva y peligrosa" debe asumirse útil para contrastar y conciliar actitudes y propuestas de solución a la crisis nacional. Al fin y al cabo, la política no se construye desde arriba solamente. La confluencia de opiniones e intereses, la mediación entre las personalidades representativas, el mutuo respeto hacen posible ese marco de acción que es la política. El proceder a tiros contra la oposición, el liquidar a los enemigos por la vía del crimen, no hace sino polarizar las cosas. Invita a legitimar el uso de la fuerza de los gobernados y posibilita el alzamiento armado en una relación dinámica entre la represión y lo que suele llamarse subversión a secas.

Los líderes del FDR de ese momento eran personas conocidas, apreciadas, provenían incluso de la órbita del poder económico y político. El caso de Enrique Álvarez Córdova es significativo. Su vida y su acción tuvo como meta la "transformación agraria", el cambio de la estructura de la tierra y de las formas de producción y distribución de beneficios para los hombres del campo. Ministro de Agricultura de varios gobiernos (de Sánchez Hernández y Molina) lo salvan del calificativo de "comunista" con que le gratifican sus asesinos; Álvarez Córdova era Presidente del Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador (MIP- TES) y cuando fue secuestrado, torturado y finalmente "ajusticiado" por cuerpos paramilitares de derecha, desempeñaba el cargo de Presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR). Era un político que recién acababa de renunciar del gabinete de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, por no ser atendido en sus demandas de reforma agraria y oponerse a los métodos represivos de algunos jefes militares.

Igual puede afirmarse de Enrique Escobar Barrera, profesor universitario con estudios de filosofía en la Universidad de Dundee (Escocia) y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MNR, a quien por su condición social-demócrata no puede achacársele el uso de la violencia, siendo como era un intelectual del sector medio.

En cuanto a Juan Chacón, proveniente



Cinco líderes de izquierda asesinados en El Salvador
La guerra civil empezó hace ya tiempo

de una familia rural pero con formación técnica-urbana, es claro que su militancia en el Bloque Popular Revolucionario (BPR) lo ubica en una organización democrática de masas que busca el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores rurales, en línea reivindicativa que no ha sido entendida por la clase dominante ni por el ejército; Chacón no era un miembro de los frentes armados, sino un joven de grandes entusiasmos e ideales, situado por los acontecimientos a la cabeza de un "bloque" de composición pluralista. Manuel de Jesús Franco, estudiante de relaciones internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, representaba los valores de la juventud incorporada al Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN) que no hacía pocos años participara en las jornadas electorales de El Salvador, y quien, como la mayor parte de revolucionarios de este período, se mostró decepcionado del procedimiento fraudulento e ineficaz de acceso pacífico al poder público del país.

Humberto Mendoza, dirigente del Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), estudiante universitario de línea diferente a la

de Franco, expresaba la tendencia de alcanzar triunfos concretos para las masas proletarias por la vía de la movilización, la denuncia y el reclamo organizado. Y Doroteo Hernández, estudiante de secundaria, que pertenecía a la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT) era viva muestra de que los miles de familias que habitan en los cinturones de miseria de San Salvador (alrededor de 250,000 personas) están concientes del cambio estructural de la sociedad y que sólo la acción abierta y frontal puede conmover a quienes disfrutan del privilegio o a aquéllos que lo hacen posible con su indiferencia.

De los 6 dirigentes del FDR, asesinados brutalmente el 27 de noviembre de 1980, cinco eran del sector medio radicalizado en conciencia política, y uno de la alta burguesía. Interesante proporción para indicar que, así sólo haya un capitalista, la revolución ha tocado todas las puertas y se ha interiorizado a todos los niveles sociales.

El Frente Democrático Revolucionario (FDR), como han explicado sus principales líderes y tal como se desprende de su plataforma programática, es una alianza de partidos legales (el social demócrata MNR y el

socialista marxista UDN) con el MIPTES, el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) sectores independientes del sindicalismo y de varios gremios, la Universidad de El Salvador y la Coordinadora Revolucionaria de Masas (BPR, FAPU, Ligas 28 de Febrero, MLP). De sus principales tesis y de su accionar, a la búsqueda de integrar un gobierno democrático-revolucionario, se colige que su órbita de influencia no es la militar insurreccional sino la política de masas y, en consecuencia, es legítima su presencia en el país, en virtud de que "todos los ciudadanos son libres de organizarse en partidos o frentes políticos para buscar el mejoramiento de la nación". Sin recurrir a la Constitución Política, sino a los más elementales derechos del hombre, el FDR es una instancia válida en los momentos de confrontación que vive El Salvador. Afirma en su totalidad una tendencia, una opción, que puede ser aceptada o rechazada en parte o en todo, pero que de ninguna manera puede ser ignorada o, mucho menos, "liquidada" a balazos.

El crimen cometido en la persona de los dirigentes del FDR constituye, sin lugar a dudas, una violación a los derechos humanos. Un acto irracional que solamente puede compararse en profundidad al asesinato del Arzobispo Mons. Oscar A. Romero o al se-

cuestro, tortura y desaparición física de las religiosas norteamericanas Maura, Ita, Dorothy y Jean, quienes el 2 de diciembre de 1980 perecieron a manos de cuerpos paramilitares, según denuncia de funcionarios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador, y en una nula investigación que demuestra la impunidad de estos hechos sanguinarios que colocan a nuestro país en la peor esfera del mundo.

Mientras en nuestra patria se recurra a métodos brutales: el asesinato político, el secuestro y la tortura, la venganza por propia mano, el desconocimiento del orden jurídico justo, y no se entienda que la paz y la seguridad no reside en la fuerza de los fusiles, sino en el bien público y en el respeto a la dignidad de las personas, el recorrido por el deterioro seguirá hasta el derrumbe institucional. ¿Hasta cuándo comprenderemos que la violencia engendra violencia? El crimen político, de arriba o de abajo, ¿no trae acaso nuevas desgracias?

Es ahora de recapacitar. La impunidad y la complicidad en esos crímenes y en otros miles más cometidos en 1980 y 1981, debe servir para reparar en el daño que se le hace a la nación, cuando la parcialidad, el sectarismo, la ebriedad de mando y la arbitrariedad se conjugan para sembrar la muerte y la destrucción.

R.R.C.

Diciembre de 1981.